

Dos países en uno: el desafío real de la unidad nacional*

La gestión del presidente Saca depende de su imagen mediática y del uso —y abuso— de los medios de comunicación de masas para mantener un nivel de legitimidad aceptable, en la opinión ciudadana. Esta forma de gobernar ha sido característica de los gobiernos de ARENA, pero el actual la utiliza de forma sistemática e intensa para promover la imagen de aquél con menoscabo de la institucionalidad. Este enorme esfuerzo mediático no ha sido en vano, puesto que ha logrado mantener un nivel de aceptación significativo del presidente Saca, aunque muestra una tendencia hacia la disminución. En dos años, el deterioro de la aceptación inicial es notable.

Las contradicciones entre la valoración positiva de la imagen del mandatario y el pesimismo ante la situación del país, reflejado en la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), son prueba de ese deterioro. Las críticas por la conducción del país crecen más rápido que las dirigidas hacia la persona del presidente Saca. El gobierno acumula valoraciones positivas, en el plano general y abstracto; pero éstas se tornan negativas, cuando la gente juzga programas específicos, incluidos los más publicitados, como la llamada Red solidaria o el Plan súper mano dura. Paradójicamente, una buena parte de las valoraciones más positivas proviene de quienes tienen menos educación y más pobreza, de quienes dicen haber recibido menos beneficios del gobierno y de quienes se consideran menos representados por él —aparte de quienes acaparan el ingreso nacional. Estas contradicciones son efecto de la propaganda, que desvincula la imagen y el discurso oficial de la realidad cotidiana de la ciudadanía. Gracias a este eficaz divorcio, el mandatario ha podido conservar el favor de la opinión pública. No obstante, las señales de agotamiento de su gobierno son inculcables. La reacción del presidente Saca no se hizo esperar. En su segundo discurso anual, intentó insuflar nuevos bríos a su gobierno.

1. El segundo año es insatisfactorio

Al concluir el segundo año de gobierno del presidente Saca, los voceros gubernamentales y la gran prensa hablaron mucho de promesas cumplidas y de capital político, como parte del esfuerzo mediático para contrarrestar las percepciones negativas sobre su desempeño que, de una u otra manera,

* Editorial, pp. 503-515.

sabían que aparecerían en las encuestas de opinión pública. Estas percepciones son cruciales para este gobierno, el cual ha optado por dar una preponderancia descomunal a la popularidad o a la aceptación de la imagen del presidente. No obstante estos esfuerzos, después de dos años, los índices más relevantes muestran un deterioro. Ahora son menos los que evalúan positivamente al gobierno y los que perciben cambios favorables y son muchos más los que observan cambios negativos, son bastante menos los que opinan que el presidente cumple sus promesas, que escucha las demandas de la gente, que vela por el bienestar de todos y son más los que afirman que está manipulado, los que ven peor la situación económica y la seguridad ciudadana, y son menos los que opinan que el presidente gobierna bien. Este deterioro evidente explica el descenso de más de diez puntos porcentuales, en el indicador general del gobierno del presidente Saca.

Dos son los fracasos que la opinión pública destaca con unanimidad, al concluir el segundo año de gobierno de Saca: el deplorable estado de la economía y el fracaso del gobierno en garantizar la seguridad ciudadana. El único éxito indiscutible es la construcción de infraestructura vial. En efecto, la mayoría de la población señala la economía como el problema principal y, además, casi dos tercios observan a un gobierno despreocupado. Para un tercio, el país está peor ahora y para cuatro de diez sigue igual, sin mejora alguna, lo cual significa que para dos tercios, el gobierno de Saca no hace mayor diferencia, en cuanto a crear empleo y a erradicar la pobreza. Una inmensa mayoría asegura que la situación está peor o igual que hace un año. Es decir, la mayoría de la población no comparte la valoración positiva, ni el optimismo presidencial, de ARENA, de los grandes empresarios y de la prensa, que les hace eco. En dos años se ha duplicado la proporción de quienes piensan que la situación económica ha empeorado.

La gente no puede identificar las bondades de los planes gubernamentales para enfrentar algunas de las consecuencias de la crisis económica. No existe claridad sobre la eficacia del plan oportunidades para combatir la pobreza extrema. Sólo los beneficiarios lo valoran positivamente. La postura ante el tratado de libre comercio con Estados Unidos, la otra gran propuesta gubernamental, para impulsar el crecimiento de la economía, es más definida. La mayoría no está de acuerdo con él y la inmensa mayoría piensa que no le trae beneficio alguno. En términos generales, las políticas económicas y sociales no son aceptadas por la opinión ciudadana. En dos años, quienes opinaban que el país mejoraba, se han reducido a la mitad. Aun cuando el presidente Saca sostiene que ha cumplido sus promesas, la gente dice que a medias y un tercio rechaza esa afirmación. La proporción de quienes hace un año pensaron que cumpliría, ha disminuido en un 80 por ciento. En dos años se han reducido a la mitad los que sostenían que el presidente Saca escuchaba sus demandas. Por lo tanto, contrario a lo que éste sostiene, en su discurso, no escucha a la gente y, en consecuencia, ésta no influye en las decisiones gubernamentales.

De ahí que muchos tengan puestas sus expectativas, no en las promesas del gobierno de Saca, sino en el norte. Esta actitud bastante general contradice uno de los argumentos que los gobernantes centroamericanos adujeron en Washington, cuando cabildaron a favor del tratado de libre

comercio. En ese entonces, sostuvieron que el tratado impulsaría el crecimiento económico y disminuiría la emigración. En privado, con toda seguridad, el presidente Saca no resiente este desinterés popular en su gestión, pues entre más emprendan la ruta hacia el norte, su gobierno tendrá menos presión social. La idea consiste en que lleguen a su destino, se establezcan, encuentren empleo y envíen dólares de regreso.

El consenso de por qué el gobierno de Saca desilusiona es cada vez mayor. La opinión pública señala que su prioridad son los ricos, los empresarios y los integrantes de su partido. En esta misma línea, pero desde otra perspectiva, ahora son más lo que opinan que el presidente es “manipulado”, es decir, gobierna para los millonarios, los poderosos, ARENA, Estados Unidos y los empresarios, respectivamente. En contrapartida, son más los que opinan que no se ocupa del bienestar de toda la ciudadanía, sino sólo de estos sectores privilegiados. En consecuencia, quienes piensan que el presidente Saca gobierna bien, se han reducido a casi la mitad, en dos años. La consistencia de este consenso se constata desde la perspectiva de los sectores más privilegiados. Sólo dos de diez opinan que la situación económica ha mejorado y que se han beneficiado con la política económica actual. Por consiguiente, para este reducido sector, la imagen del mandatario también ha mejorado. Mientras este último sector no considera necesario introducir modificaciones importantes, en el rumbo adoptado, la mayoría recomienda que, en su tercer año de gobierno, el presidente Saca debe crear empleo, erradicar la pobreza y velar por el bienestar de todos.

El descontento con el gobierno actual es inocultable. Argüir con el indicador general —la “nota”, ligeramente superior a seis, en una escala de uno a diez— es inválido, porque se trata de un promedio y no de un porcentaje. Lo más significativo no son los seis de diez que aprueban al gobierno, sino que, en dos años, éste ha perdido más de un punto, en aprobación general. Tampoco es pertinente invocar el deterioro normal de cualquier gobierno, después de dos años al frente del poder ejecutivo. Más aún, en comparación con sus predecesores de ARENA, excepto el primero, el presidente Saca todavía retiene un indicador general superior. A diferencia de los dos anteriores, quienes se mantuvieron estables en la medianía, el presidente Saca comenzó muy alto, al suscitar grandes expectativas de transformación económica y social, pero dos años después, al difuminarse con relativa rapidez esas expectativas, arrastran consigo al indicador general. En una tercera reacción, el presidente Saca alegó que no gobernaba para las encuestas o la popularidad, sino para el bien del país. Pero Casa Presidencial cultiva la imagen presidencial de forma asidua e intensa; aunque, pese a sus esfuerzos, no ha logrado levantarla al punto de partida. De hecho, el argumento de mayor peso, para no modificar la política actual, es la amplia popularidad del mandatario. La evaluación del segundo año no deja dudas sobre el descenso pronunciado de ésta, ni tampoco sobre las pérdidas en el capital político, después de las elecciones legislativas de marzo de este año.

Las pérdidas no son considerables, pero sí apreciables. Las expectativas y el optimismo de hace dos años se han diluido. Ciertamente, la mayoría de la población no comparte el optimismo del presidente Saca. Pareciera que,

después de dos años, la población se cansó de esperar el cumplimiento de las promesas y la llegada de los cambios anunciados, y comienza a dar la espalda al mandatario y a su gobierno. Hace dos años, cuando predominaban las sonrisas y la confianza, predecir este escenario era ir contracorriente. Las sonrisas han comenzado a desaparecer y el panorama se ha vuelto sombrío. El presidente Saca comienza su tercer año con una opinión pública poco favorable y con una correlación de fuerzas legislativas poco favorable.

2. Un llamado sin sentido a la unidad

El gran tema del segundo discurso anual del presidente Saca fue la unidad nacional, cuya síntesis está recogida en la publicidad gubernamental: “un país unido tiene sentido”. La unidad está planteada en términos incluyentes, a partir de la superación de unas diferencias catalogadas como “naturales”. La invitación exhorta a hacer a un lado “mezquindades” y “recelos” para construir desde las coincidencias. Así, el mandatario invitó a trabajar en una misma dirección, en espíritu de unidad y consenso. Este llamado puede ser interpretado como la respuesta a los resultados poco satisfactorios de su segundo año de gobierno. Alrededor del tema de la unidad nacional, el presidente Saca habría intentado recuperar el dinamismo de hace dos años, imprimir nuevo sentido a un gobierno, cuyo “rostro humano” palidece con rapidez, y reavivar las expectativas iniciales. No obstante la importancia de la unidad nacional, la invitación es poco convincente.

Dos son los fracasos que la opinión pública destaca con unanimidad, al concluir el segundo año de gobierno de Saca: el deplorable estado de la economía y el fracaso del gobierno en garantizar la seguridad ciudadana.

La construcción de una verdadera unidad nacional pasa por el reconocimiento de aquello que mantiene dividida a la nación. Sin embargo, el presidente Saca, a lo largo de su prolongada intervención, no se refirió a estas divisiones, excepto a aquella que enfrenta a ARENA y al FMLN, partido al cual se dirigió de forma particular. Sin abordar estas divisiones y sin proponer mecanismos para superarlas, el llamado a la unidad se vuelve vacío y se convierte en una consigna

más, como la que hace dos años anunció un gobierno con rostro humano.

La primera gran división que separa a la nación salvadoreña es la desigualdad y la exclusión, las cuales generan pobreza. La brecha que aleja al reducido grupo que acapara el ingreso nacional de la inmensa mayoría no sólo es abismal, sino que cada año se ensancha más. En esta estructura desigual, las ventajas del crecimiento económico son irrelevantes, porque, ya sea éste poco o mucho, aquéllas son acaparadas por ese pequeño grupo, de por sí, privilegiado. Ahí donde existe exclusión, se atenta contra los derechos de alguien. Esta división se manifiesta en la existencia de dos naciones muy diversas y contrapuestas. Las coloridas y lujosas revistas de la prensa matutina se encargan de exhibir a “la nación exitosa”, mientras que las páginas del periódico muestran la otra cara de la realidad nacional. Otra gran división, que comprende a la mitad de la población salvadoreña, es la del género. Un poco más de la mitad de la población total está integrada por mujeres, las cuales sufren discriminación en el hogar, los

servicios básicos, el trabajo, la política, el derecho y, en fin, en todos los ámbitos de la vida nacional. El presidente Saca pronto olvidó una de las promesas más resonantes de su campaña: no abandonar a las mujeres solas. Aun cuando el concepto de mujer detrás de esta promesa era muy tradicional, es una de las promesas incumplidas. Otras dos grandes divisiones son la edad y la educación. La juventud, la inmensa mayoría de la población, no tiene oportunidades para desarrollar sus capacidades y habilidades. Los desafíos que plantea a la sociedad y al Estado, sobre todo, aquella organizada en pandillas, no son comprendidos. La tercera edad está abandonada y tampoco recibe el trato digno que merece. Por último, para sólo mencionar las más críticas, está la división de la diáspora salvadoreña. Uno de cada cuatro salvadoreños reside y trabaja fuera de las fronteras nacionales, pero el emigrado no forma parte de la nación salvadoreña. Posee su ciudadanía, pero no le está permitido ejercer los derechos inherentes a ella, de los cuales el del sufragio es sólo uno. La diáspora es considerada, en términos pragmáticos, como fuente aparentemente inagotable de dólares frescos y como instrumento útil para promover las agendas partidarias o gubernamental. Una de las consecuencias del enfoque instrumental es la doble visión del emigrante. El exitoso es aquel que logra atravesar la frontera estadounidense, que se establece, encuentra trabajo y envía dólares. En cambio, el deportado es recibido como un fracasado, pues no pudo llegar o no pudo permanecer allá, y al volver, no sólo es recibido como derrotado, sino que, además, es tachado de delincuente peligroso (ver *ECA*, “El desafío de la diáspora al Estado y la ciudadanía”, 690, pp. 379-391).

Estas divisiones no son naturales, es decir, no han sido dadas por la naturaleza, sino que han sido construidas, a lo largo de la historia, por la sociedad y el Estado salvadoreños. Por lo tanto, la unidad nacional sólo puede ser edificada en la medida en que, al menos las divisiones aquí apuntadas, se trabaje para acortar la distancia que separa y excluye. Paradójicamente, el plan del gobierno de ARENA para el resto del mandato del presidente Saca no contiene ninguna propuesta para ello, excepto una vaga referencia a un plan nacional, en cuya elaboración participarían diversas fuerzas sociales. La propuesta para los próximos tres años se reduce a una serie de medidas desarticuladas de lo más variadas y con un alcance diverso. En un año, esta lista puede que sea sustituida por otra, según las conveniencias electorales de ARENA.

De momento, la lista incluye una política criminal, que no es más que la reformulación de los fracasados planes anteriores, los cuales insistían en la represión, aunque ahora se agrega la investigación científica del delito, un instrumento inalcanzable para la policía; actividades de prevención y mitigación para enfrentar la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales, hasta ahora pospuestas, y, de todas maneras, de corto plazo y con un alcance limitado; acceso a los llamados Fondos del milenio, una decisión que depende del gobierno de Estados Unidos y no del salvadoreño; generación de energía con fuentes renovables, una decisión estratégica pospuesta para privilegiar a las transnacionales, y una comisión nacional de energía, incapaz de responder a la crisis; ampliación de los servicios de salud, pero sin contar con el personal, los equipos y los medicamentos indispensables para atender la demanda y, además, sin financiamiento; construcción de

infraestructura, la actividad más visible y mejor evaluada del gobierno actual; revisión del salario mínimo, inalterado durante tres años en el sector urbano y, durante siete años, en el rural, y sin compromiso para elevarlo al mismo ritmo del costo de la vida; una serie de medidas que adolecen de universalidad y que, además, no enfatizan la agricultura de subsistencia; subsidio para el gas y la electricidad, medidas de antigua data; y alfabetización y guarderías infantiles, en las dependencias públicas.

Este listado de medidas pudiera ser acortado o ampliado o reemplazado sin consecuencias, porque el presidente Saca no estableció criterios para evaluar sus resultados, excepto en el caso de la Red solidaria. Tampoco existe conexión entre estas medidas y la unidad nacional o el plan nacional, en los cuales se fundamentarían la creación de “un país con más esperanza” y “con más posibilidades de desarrollo” o para la “nueva apuesta de fe en el mañana”. Los discursos anuales de los presidentes salvadoreños no pretenden informar sobre las actividades gubernamentales, ni mucho menos rendir cuentas a la ciudadanía. Nunca han sido programáticos. Pero, en esta ocasión, la miscelánea de medidas o actividades, que pondrían los fundamentos de la unidad nacional y de la humanización, refleja la pasividad de un gobierno que se ha abandonado a los vaivenes de la globalización. De la misma manera que los primeros liberales creyeron que el progreso era ilimitado e indefectible, los liberales salvadoreños del tiempo de la globalización creen que el crecimiento económico, el desarrollo y la prosperidad les están garantizados de antemano. Por eso, cuando son confrontados porque, en lugar de avanzar hacia esas metas, el país ha retrocedido, recurren a la fe y la esperanza, virtudes cristianas que sólo pueden ser depositadas en Dios y en nadie más. La dificultad no estriba, según la

teoría gubernamental, en la política macroeconómica, la cual sería y ha sido aplicada con rigor, sino en factores externos incontrolables. La elevación del precio del petróleo habría impedido un mejor desempeño económico y Estados Unidos sería, al parecer, el último responsable del deterioro de la seguridad ciudadana. Estos factores habrían confabulado contra el buen gobierno de ARENA y contra la buena voluntad del presidente Saca. La economía marcha mal por causa del precio del petróleo y el crimen está fuera de control, porque el gobierno estadounidense deporta a delincuentes condenados por los tribunales de ese país.

El encarecimiento del crudo es un hecho indiscutible, pero una política energética, de mediano y largo plazo, pudo haber suavizado el impacto de la crisis actual. Una estrategia de largo plazo para generar electricidad con fuentes renovables, hubiera mantenido al país menos dependiente del petróleo, tal como lo fue antes de las privatizaciones. Aun así, si

La construcción de una verdadera unidad nacional pasa por el reconocimiento de aquello que mantiene dividida a la nación. Sin embargo, el presidente Saca, a lo largo de su prolongada intervención, no se refirió a estas divisiones [la desigualdad y la exclusión, las cuales generan pobreza; la de género, la edad y la educación, la diáspora salvadoreña, etc.], excepto a aquella que enfrenta a ARENA y al FMLN, [...] Sin abordar estas divisiones y sin proponer mecanismos para superarlas, el llamado a la unidad se vuelve vacío y se convierte en una consigna más, [...]

éstas se hubieran apegado a la teoría que las justificó, no habría margen para que las empresas generadoras y distribuidoras abusaran del consumidor. Un control estricto de las transnacionales no hubiera permitido la conformación del oligopolio actual. Una legislación centrada en el consumidor, y no en las ganancias de las transnacionales, no hubiera premiado la ineficiencia de éstas, ni tampoco hubiera abierto la puerta para que el cálculo de la tarifa encareciera el valor de la electricidad. Pero los gobiernos de ARENA se desentendieron de la economía y la abandonaron a las fuerzas del mercado, es decir, a los caprichos del capital transnacional. Por eso, las diversas superintendencias, e incluso la defensoría del consumidor, son más nominales que efectivas, ya que no tienen capacidad institucional para controlar y muchos menos para sancionar a las transnacionales, aparte que tienen un serio conflicto de intereses.

La crisis energética no sólo comprende la elevación desmesurada del precio de la electricidad, sino también la escasez de energía. La demanda es mayor que la oferta, por falta de planificación estratégica. Aun cuando el gobierno lo niega, algunas industrias han experimentado racionamiento regular, lo cual afecta su producción, al mismo tiempo que contradice el compromiso de aquél con la reactivación de la economía. El año pasado, cuando se sintió el primer impacto de la elevación del precio del combustible, el presidente Saca estableció una comisión nacional de energía la cual, hasta la fecha, todavía no ha superado el nivel de la conversación interna sobre posibles medidas y energía barata. Así, hablan de combustible alternativo o de generar energía con fuentes renovables como si éstas estuvieran disponibles. También han hablado de ordenar el transporte público, para evitar embotellamientos y el consiguiente gasto innecesario de combustible, pero en dos años, no han dado un solo paso. A la presión de la población por la subida del precio del combustible y ahora de la electricidad, el gobierno responde con propuestas domésticas, es decir, anima a la resignación y el ahorro de energía y combustible. En realidad, ni el gobierno de Saca, ni la gremial de la gran empresa privada tienen respuesta para enfrentar la crisis, de la cual ellos son responsables, por lo que corresponde al ámbito interno, puesto que, en su momento, se negaron a la planificación estratégica y a preservar el papel fundamental del Estado en su desarrollo, en beneficio de las transnacionales, de las cuales los segundos son accionistas.

Los argumentos esgrimidos por el gobierno de Saca y la gremial de la gran empresa privada, ante la amenaza de un decreto legislativo para congelar la tarifa de la electricidad, pusieron en evidencia sus verdaderos intereses. Ambos invocaron el régimen de libertades, la seguridad jurídica y la confianza de la inversión. Pero ese régimen de libertades privilegia al gran capital, en detrimento de las libertades de la mayoría. La seguridad jurídica, que tanto reclaman, es la garantía para abusar del más débil. La ciudadanía ni siquiera fue informada debidamente del volumen del aumento, ni de sus razones técnicas. El precio del crudo es sólo una de ellas, pues también cuentan los contratos, el método para calcular la tarifa, las superintendencias, las ganancias, los impuestos, etc. El propósito del decreto de la oposición era forzar al presidente Saca a vetarlo y así obligarlo a asumir, junto con ARENA, la responsabilidad por la elevación del costo de

la vida. Aun cuando el curso de la economía estuviera fuera del alcance gubernamental, en repetidas ocasiones, el presidente Saca ha prometido empleo, desarrollo y bienestar general. Pero en el momento en que se desentiende de la economía, sus promesas se vuelven demagogia.

De la misma manera, el gobierno actual se ha desentendido del auge del homicidio, de la violencia social y de los atentados contra la propiedad. En sus dos primeros años, en continuidad con su predecesor, responsabilizó a las pandillas de la generalización de la inseguridad ciudadana. Esta interpretación fue aceptada por la opinión pública. En consecuencia, la policía organizó vistosas operaciones de caza y captura de pandilleros, hasta abarrotar las cárceles. La medida dio réditos electorales valiosos pero, a medida que transcurría el segundo año del presidente Saca, se volvió cada vez menos convincente. No obstante mantener en prisión a miles de pandilleros, incluidos algunos de sus cabecillas principales, los homicidios no cedieron y tampoco la inseguridad. Entonces señaló a Estados Unidos como responsable, por deportar a los inmigrantes indocumentados, a quienes calificaba de delincuentes. Pero como esta interpretación, obviamente, no detuvo el aumento del homicidio, el gobierno de Saca matizó que los deportados eran criminales, condenados a largas penas de prisión. La falta de lógica salta a la vista. Menos del 5 por ciento de los deportados entra en las categorías gubernamentales. Aparte que llama mucho la atención que dos mandatarios que conversan telefónicamente con frecuencia sobre temas de interés común, no hayan podido encontrar una salida satisfactoria a la cuestión. En cualquier caso, es un hecho incuestionable que la policía no tiene control sobre los delincuentes, pandilleros o no, deportados o residentes en el país, comunes u organizados.

En realidad, el gobierno de ARENA no permanece tan al margen como pudiera parecer, pues hay indicios cada día más irrefutables de una operación nacional de limpieza de pandilleros. En efecto, escuadrones de matones, vinculados de alguna manera todavía no aclarada con la Policía Nacional Civil y, por lo tanto, con el gobierno de Saca, han regresado para liberar a la sociedad de las pandillas, por medio de ejecuciones sumarias. Estas son presentadas, y aceptadas por una opinión pública desinformada y desesperada, como consecuencia de la guerra de eliminación mutua de las pandillas. Las hondas raíces autoritarias de la sociedad salvadoreña, inclinada a exigir esta clase de respuesta, y su desesperación ante la impotencia, han hecho fácil la aprobación ingenua de tal explicación. Tanto las interpretaciones atrabiliarias del gobierno como el extremismo de su respuesta represiva son una admisión pública de impotencia. El precio del crudo y las deportaciones no son más que una excusa para ocultar la ausencia de planes estratégicos de mediano y largo plazo y para justificar la improvisación. Ante este panorama cabe cuestionar el sentido de un gobierno de ARENA, que admite ser impotente ante los dos problemas más graves del país.

A estos dos problemas habría que agregar la crisis fiscal, ocasionada por la baja recaudación, debida a la baja carga tributaria, la tolerancia de la evasión y la elusión de los grandes contribuyentes potenciales, al contrabando, y al gasto creciente del pago de las pensiones, otra de las privati-

zaciones insignia de los gobiernos de ARENA, mientras el gasto público se expande año con año. La reacción a la advertencia del Fondo Monetario Internacional no se ha hecho esperar. Así, después de garantizar que no habría cambios en el Ministerio de Hacienda, el gobierno anunció la ampliación de la tributación entre el sector informal, habló otra vez del impuesto predial, de revisar los subsidios del agua, el gas, la electricidad y el transporte público, y también de las zonas francas. A raíz de la política fiscal de los gobiernos de ARENA pagan más los asalariados que las empresas, independientemente de su tamaño. En cambio, el sector más importante para aumentar la tributación y redistribuir la riqueza nacional, aquel que captura los mayores ingresos, todavía se encuentra al margen de las consideraciones gubernamentales para aumentar la tributación. Es un sector todavía intocable, aun cuando las finanzas públicas estén en estado crítico.

Las medidas anunciadas para equilibrar el déficit fiscal también adolecen de improvisación. Elevar la carga tributaria o erradicar la evasión y la elusión es rechazado por este sector como una confiscación contraria a la seguridad de la inversión. El primer Ministro de Hacienda del gobierno de Saca cayó por intentar cerrar el margen para eludir. No será fácil arremeter de nuevo contra el contrabando, porque en esta actividad están implicados policías, autoridades locales, funcionarios inmunes y, con toda probabilidad, reputados empresarios. El sistema de pensiones se ha vuelto una carga pesada, porque al diseñarlo, el gobierno de ARENA asumió un crecimiento económico irreal, al cual la economía nacional todavía ni siquiera se ha aproximado. Encandilados con las ilusiones neoliberales, el último gobierno de ARENA comprometió la hacienda pública, tanto que ahora se impone una rectificación, cuyos términos aún son desconocidos. Por tercer año consecutivo, el presidente Saca intentará reducir el gasto corriente, pero hasta ahora, en lugar de bajar, crece todavía más. El presupuesto de este año aumentó el gasto en burocracia y lo disminuyó en el área social y desarrollo económico. El ahorro está fuera del alcance del gobierno, debido a la rigidez del gasto corriente —salarios y pensiones representan el 80 del presupuesto nacional, a lo cual se agrega la actitud de los funcionarios que, con pocas excepciones, colocan su comodidad y su bienestar por encima del bien general. El cargo es una oportunidad para percibir un elevado salario, el cual va acompañado de viajes al exterior con viáticos generosos, de vehículos y combustible gratis, de conductor y guardaespaldas, de exención de impuestos y tal vez, lo más importante, de innumerables oportunidades para medrar, por ejemplo, los asesores de la asamblea. Ante estos problemas estructurales, el enfrentamiento de ARENA con el FMLN es secundario.

3. Una verdadera invitación a hacer historia

En el contexto del llamado a la unidad nacional, el presidente Saca invitó a los partidos políticos al compromiso y a “hacer historia”. Los exhortó a la apertura y al respeto mutuo. La invitación era para todos ellos, pero, de hecho, estaba dirigida de modo exclusivo al FMLN, con cuya dirigencia actual mantiene diferencias, por ahora, insalvables. Por lo que toca a los otros partidos, las diferencias que pudiera tener, siempre

son negociables, aunque, por lo general, no se guardan respeto entre ellos. En consecuencia, el presidente Saca pidió al FMLN proponer soluciones, ayudar a resolver los problemas nacionales y contribuir a la construcción de la unidad nacional, a cambio de lo cual le ofreció escuchar, comprender y apropiarse de sus propuestas. Por lo tanto, el desafío mayor para la unidad nacional sería, según el mandatario, la confrontación entre ARENA y el FMLN. Esta visión de la realidad nacional no sólo es estrecha, sino que también constituye una aproximación inadecuada a la unidad. Es una interpretación prisionera de la confrontación que aspira superar.

El obstáculo para una verdadera unidad no depende de esta confrontación, sino de la superación de exclusiones que separan y contraponen a diversos sectores sociales. Pero el presidente Saca, a lo largo de su extensa invitación, no se refirió a ellas, excepto a la dinámica de mutua exclusión de ARENA y del FMLN, la cual ni siquiera es la más determinante de la vida nacional. La lista de medidas anunciadas para los tres años de mandato que le quedan, no se corresponde con la tesis central de su mensaje, pues tampoco tiene en cuenta la fragmentada realidad nacional. Es previsible, por lo tanto, que el plan nacional mencionado, adolezca de la misma estrechez de miras. El país unido tiene sentido, lo que no tiene sentido es invitar a la unidad nacional al margen de las divisiones reales, que separan a la nación en bloques contrapuestos.

La exhortación del presidente no se aplica sólo al FMLN, sino también a ARENA. Las relaciones de estos dos partidos se caracterizan por el enfrentamiento constante, cuya motivación única es, por lo general, llevar la contraria al otro, en las instancias nacionales y locales. Por principio, ninguno de los dos puede aceptar una propuesta del otro, aun cuando sea racional, porque le parece que cede terreno ante un adversario irreconciliable. Cada uno a su estilo está convencido de la legitimidad de esta postura. Los intereses que representa serían justificación suficiente para esta oposición sin tregua, y no pocas veces, también estridente. Cada uno pretende que el otro acepte la legitimidad de los intereses que representa y, por lo tanto, exige al otro asumirlos como propios. No cabe duda que ARENA representa los intereses del gran capital regionalizado y transnacional, mientras que el FMLN representaría, de una forma imprecisa, los intereses populares. Sea lo que sea, la representación de estos intereses, por su tendencia a la totalización, vuelve inconciliables a los dos partidos. En este contexto, la política nacional se reduce a la provocación y la confrontación constantes. Esta polarización arrastra consigo a la sociedad. Pese a ello, es una confrontación artificial, que responde a las necesidades particulares de cada partido y no necesariamente a las de la totalidad. En sentido estricto, obedece a la agenda partidaria. Ninguno de los dos partidos deja espacio para construir un punto medio. En vez de ello, ambos adoptan una posición maximalista y excluyente. Por eso, el objetivo de su lucha es la destrucción política del enemigo, ya que la aniquilación militar está excluida. La mentalidad militar, que exige la aniquilación total del enemigo, no fue transformada por los acuerdos de 1992. Pero en el momento en que uno de los dos partidos exterminara al otro, acabarían con la política. Los dos aspiran a ganar siempre, en lo cual se equivocan, porque en un ejercicio político democrático no siempre se gana, ni se gana todo. Pero perder es inaceptable para ambos.

En este contexto, la invitación presidencial pareciera pretender el establecimiento de mecanismos para construir un término medio, entre estos intereses encontrados. Mirada con detención, la exhortación reviste de racionalidad política una postura inaceptable. En efecto, el presidente Saca pide, en realidad, aceptar sin discusión los intereses representados por ARENA. De esta manera unilateral, la confrontación desaparecería de la actividad política salvadoreña. De ser posible, pondría fin a décadas de enfrentamiento, pero implicaría entregar el país a la dictadura de los grandes grupos con poder económico. Esta alternativa, sin embargo, no garantiza la desaparición definitiva de disidentes y descontentos y, por consiguiente, tendría que reprimir. Dado que la sociedad está conformada por sectores diversos con intereses diferentes y, por lo general, contrapuestos, la confrontación es inevitable. Más aún, en una sociedad tan desigual y excluyente como la salvadoreña.

De aquí no se deduce, sin embargo, que la política se reduzca a la confrontación, tal como la entienden y practican el FMLN y ARENA, sino que, al mismo tiempo, es capacidad para dialogar y negociar. Esto último no supone renegar de los intereses representados, sino que, al contrario, hace posible su representación efectiva. De hecho, el FMLN pierde todas las batallas legislativas, por falta de diálogo y negociación. Sus propuestas suelen caer en el vacío. Así como no cesa de proponer medidas a favor del interés popular, así es de ineficaz. ARENA, debido al control que detenta sobre el aparato estatal, puede hacer avanzar su agenda, pero podría representar mejor si también favoreciera el diálogo y la negociación. Para más la ciudadanía que, con más olfato político que las cúpulas de estos partidos, de alguna manera intuyó esta necesidad y, a través del voto diferenciado, volvió a optar por no entregar el poder legislativo a uno de estos dos partidos.

En la medida que corresponden a un determinado sector social, los intereses representados por ARENA y el FMLN son legítimos. La ética social y política, sin embargo, pone en sordina la simetría de estos intereses, puesto que ARENA representa los de una minoría privilegiada, los grupos con poder económico, mientras que el FMLN, al menos en teoría, representaría los de la mayoría de la población. No obstante, no se puede desconocer que estos intereses corresponden a un determinado sector social con el cual, hasta cierto punto, hay que contar. El desarrollo de la capacidad de diálogo y negociación de los partidos, en particular de ARENA y el FMLN, y, en último término, de los representados por aquél presupone abandonar la obsesión con la toma del poder. ARENA ya lo tomó, pero se esfuerza para no perderlo. Para el partido del presidente Saca, el control del gobierno por parte de ARENA no es transitorio, sino permanente. No está dispuesto a volver a la oposición, tal como le ocurrió durante el gobierno de la democracia cristiana de los años de 1980. Esta experiencia lo dejó muy marcado porque, por primera vez, después de décadas en el poder —a través del Partido de Conciliación Nacional—, experimentó en carne propia lo que significa encontrarse en la oposición, sin espacio político para representar sus intereses. El FMLN, por su lado, también está obsesionado con la toma del poder, y cuando pueda llegar a él, es muy probable que se comporte exactamente igual que ARENA. Él también

piensa que la única manera efectiva para introducir los cambios revolucionarios que figuran en su agenda es desde el poder y no desde la oposición.

Planteada en estos términos, la política salvadoreña sólo tiene espacio para la confrontación política, pero llevada con mentalidad militar, lo cual hace imposible el entendimiento. Los enemigos no se entienden entre sí, sino que se esfuerzan por aniquilarse. El diálogo y la negociación sólo serán posibles cuando las dirigencias de ARENA y del FMLN rompan con esta dinámica de destrucción mutua y cuando las dos se den seguridades recíprocas para respetar el espacio político, donde defender y promover de forma efectiva su agenda respectiva. Garantizadas estas seguridades, desaparecería el temor a estar en la oposición y se abriría la posibilidad para una alternancia real en el poder. Dadas estas condiciones, no sería estrictamente necesario ocupar el poder para impulsar las cuestiones que interesan a sus representados. Más aún, cuando esas garantías están institucionalizadas y la institucionalidad es respetada por todos los partidos, sin excepción, la oposición suele incluso tener más poder que el partido de gobierno. Ciertamente, aquélla tiene más libertad que éste, porque no carga con el desgaste y la corrupción gubernamental, e incluso puede llegar a convertirse en un lugar

No cabe duda que ARENA representa los intereses del gran capital regionalizado y transnacional, mientras que el FMLN representaría, de una forma imprecisa, los intereses populares. Sea lo que sea, la representación de estos intereses, por su tendencia a la totalización, vuelve inconciliables a los dos partidos. [...] Esta polarización arrastra consigo a la sociedad. [...] Ninguno de los dos partidos deja espacio para construir un punto medio. En vez de ello, ambos adoptan una posición maximalista y excluyente. Por eso, el objetivo de su lucha es la destrucción política del enemigo, [...] Los dos aspiran a ganar siempre, en lo cual se equivocan, porque en un ejercicio político democrático no siempre se gana, ni se gana todo. Pero perder es inaceptable para ambos.

para impulsar transformaciones importantes. En las circunstancias actuales, el primer paso para contrarrestar esta dinámica está más al alcance de ARENA que del FMLN. El partido de gobierno tiene más margen para tomar una iniciativa de esta envergadura, porque se encuentra en el poder. El FMLN, por el otro lado, no tiene arrestos suficientes para dar el primer paso, porque para su actual dirigencia sólo la confrontación es revolucionaria. Pero como un partido es reflejo exacto del otro, en cuanto ARENA se abra al diálogo y la negociación, arrastrará consigo, tal vez contra su voluntad, pero de forma inexorable, al FMLN.

La obsesión con la toma del poder deja a los partidos sin proyecto sociopolítico. Los principios y los planteamientos políticos desaparecen ante un objetivo único, llegar al poder o permanecer en él de forma indefinida. Al quedarse sin propuesta, los partidos con facilidad caen en el cinismo y la corrupción. La verdad es reemplazada por la propaganda, la simulación y el engaño. El proyecto sociopolítico, por la astucia. El diálogo, por la amenaza, el chantaje y la cooptación. De ahí que sea más importante publicitar que gobernar, prometer que cumplir y desacreditar y acusar que negociar con el adversario. La política ya no es asunto de los políticos y de los especialistas, sino que queda en manos de los publi-

cistas y los asesores de imagen. En efecto, en las dependencias gubernamentales y también en los de los partidos, los encargados de las oficinas de comunicaciones son mucho más importantes que los especialistas y técnicos. Al final, los resultados no interesan, sino aquello que las pantallas de televisión o los despliegues gráficos proyectan. El presidente Saca todavía puede derivar legitimidad de esta forma de gobernar, pero no resolverá los problemas fundamentales del país, ni tampoco contribuirá a la construcción de la unidad nacional. Entre la opinión pública, el gobierno del presidente Saca es popular, pero también ineficaz.

Sin un giro radical en la forma de hacer política y de gobernar del presidente Saca, su llamado a la unidad nacional no será más que otra consigna, muy parecida a la que proclama que su gobierno posee un rostro humano. Quizás le proporcione margen suficiente para lanzar el tercer año de gobierno y una excusa para hacer recaer los nuevos fracasos en un FMLN pertinaz, que se niega, según el juego de imágenes publicitarias, a aceptar la mano tendida de un presidente comprensivo y generoso. Los publicistas poseen habilidad para conseguir la aceptación popular de esta imagen. Ahora bien, las divisiones nacionales son tales que, la ardua empresa de construir la unidad que las supere, no debiera ser una mera consigna para asegurarse la popularidad.

Hasta ahora, la sociedad ha sido arrastrada por la lucha librada por el FMLN y ARENA y, por consiguiente, ha sido obligada a tomar partido por uno de los dos bandos. La lucha es tan dura que la obediencia a las directrices de la dirigencia es exigida con rigor. La independencia es interpretada por ambos como una concesión indebida a las posiciones del enemigo. Esta relación es claramente perversa y, por lo tanto, debe ser revertida por la misma sociedad que sufre sus consecuencias. Dado que los partidos políticos ejercen una función crucial de intermediación de los intereses de los diversos sectores sociales ante el Estado, éstos debieran forzarlos a cumplir eficazmente dicha función. El desafío que los partidos políticos y el gobierno tienen planteada es la construcción de la unión de los tres países que conforman El Salvador de hoy: aquel que se beneficia de la política gubernamental, el más pequeño, desde una perspectiva demográfica; el inmenso país excluido, que reside dentro de las fronteras nacionales, y la otra porción excluida, que reside fuera de ellas. Sólo así tendría sentido la unidad nacional.

San Salvador, 28 de junio de 2006.